



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 20408/2021

AUTOS: “EDENOR S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 1/23 contra la Resolución nro. 2021-1954-E que desestima el recurso de revisión interpuesto contra la resolución nro. 236/18 que desestima el recurso de impugnación deducido y confirma la deuda determinada en virtud de la incorrecta aplicación del beneficio establecido en el inc. b) del artículo 2 del decreto 814/01.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que por nota de fecha 27/10/21, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

Que la aquí accionante, en su escrito recursivo, en remplazo del depósito total de la deuda, tal lo exigido por la normativa reseñada, acompaña seguro de caución en favor de la AFIP.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

Fecha de firma: 27/06/2024

Alta en sistema: 12/07/2024

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#35951440#417381265#20240626111507657



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

No empece a la conclusión arribada, el seguro de caución contratado (ver póliza nro. 134.576, toda vez que, con arreglo al criterio de esta Sala, sólo ha sido admitido como sucedáneo del mentado requisito del depósito previo en caso de haberse alegado y probado su imposibilidad o extrema dificultad, lo que no acontece en el sub examine. (Cfrs, entre otras, sentencias interlocutorias nros. 77728 del 27.12.02 , 88751 del 24.10.05 y 90294 del 27.2.06 in re 9433/00 “Supermercados Cáceres SRL. C/AFIP - DGI s/impugnación de deuda” y 5609/04 “Adexa S.A. c/AFIP – DGI s/impugnación de deuda” y 3829/05 “Orígenes AFJP S.A. c/AFIP - DGI s/impugnación de deuda”, respectivamente y más recientemente sentencia del 5/10/22 recaída en los autos “GASTRO EVENTOS S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DEINGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”).

Que tampoco resulta de aplicación el criterio sostenido por el Tribunal entre otro en “SUCESTORES DE YEIZEL KATZ S.H. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”, sentencia del 4/08/22, por cuanto lo allí manifestado respecto de la excepción aplicada se hizo en el entendimiento que el obrar del organismo de recaudación sustenta su posición en normas sobre las que han recaído reiterados pronunciamientos en contrario, por lo que en aquel caso correspondía encuadrar la presentación en análisis en la última de las hipótesis de excepción.

Mientras que en el presente la aplicación de la alícuota menor pretendida, se hace sobre la base de la modificación de la sociedad a partir de la eliminación del régimen de capitalización dispuesto por ley 26425 y, en consecuencia, la participación del estado en el capital societario desde que operó la transferencia del fondo de jubilaciones a la ANSeS, situación que tornaría aplicable lo dispuesto por ley 22016, cuestión que aún no han sido objeto de tratamiento y opinión invariable, como lo acontecido en el precedente ut supra citado.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar formalmente inadmisibile el recurso interpuesto; y 2) sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

